

Plaza pública

para la edición del 16 de diciembre de 1994

Sureste explosivo

Miguel Ángel Granados Chapa

Inteligente es, y puede ser eficaz en diversos sentidos, la decisión del Presidente Zedillo de incorporar al Congreso de la Unión en el abordamiento de la explosiva situación chiapaneca. Propuso integrar una comisión de siete legisladores que medien entre el Ejecutivo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aparte el involucramiento del poder legislativo, la propuesta presidencial buscaba conseguir la participación de los partidos opositores, especialmente el PRD que con ese mecanismo hubiera podido actuar desde fuera del conflicto, aunque en algunos de sus aspectos (como el poselectoral y de algún modo en el agrario) sea parte de él. A mi juicio, ese partido procedió erróneamente al marginarse de esa comisión, como lo anunció ayer.

Zedillo propuso que un legislador de cada grupo con representación en las Cámaras sea parte de la comisión, con lo cual el PRI, el PAN el PRD contarían con dos miembros (un senador y un diputado cada quien) y el PT dispondrá de un lugar en el grupo. Aunque ya las dos Cámaras habían organizado comisiones de seguimiento sobre los conflictos de Chiapas, la que se reúna ahora, sin el PRD, tendrá un carácter marcadamente diverso, ya que se propondrá comunicar a las partes en conflicto. Lo

hará, además, con un peso político superior al que tuvieron los comisionados Manuel Camacho y Jorge Madrazo, que dependían del Presidente de la República. No habrá mengua de la soberanía del Congreso, de que forman parte los legisladores, ni de su autonomía personal, pues el Presidente no los hizo sus empleados, y ni siquiera los ha nombrado. Sólo propuso el mecanismo, y cada grupo parlamentario seleccionó a quienes los representan. Fue entonces cuando el PRD rehusó participar.

La comisión legislativa podrá, y creo que aun deberá, coordinarse con la Comisión Nacional de Intermediación, organizada por el obispo de San Cristobal de las Casas, don Samuel Ruiz, que sigue siendo mediador en el conflicto, reconocido por ambas partes, mientras que el nuevo grupo requiere entrar en contacto con el zapatismo armado y esperar ser tenido como interlocutor. Ante problemas de la magnitud del que vive Chiapas (y con esa entidad el país entero), no sobran las voluntades que sumen esfuerzos y buenos oficios en pro de la paz. Con el carácter propio de cada cual, y hallando los modos pertinentes para que en vez de estorbarse se alimenten y dinamicen recíprocamente, las dos comisiones pueden encaminarse al mismo fin.

Desde que era candidato, y supongo que no ha mudado su parecer, el ahora Presidente Zedillo vio sin agrado la participación del obispo Ruiz en la intermediación. Sería impropio que su propuesta para integrar la comisión mediadora legislativa produjera el efecto de marginar al obispo de San Cristobal de las

Casas. Aun sus más acérrimos enemigos reconocen que sin su presencia todo arbitrio para llevar la paz a Chiapas se frustrará o al menos topará con intensas dificultades.

La buena disposición de ánimo que muestra el Presidente de la República con esta iniciativa, y la reiteración de sus propósitos de paz (pues ha dicho, aunque no con esas palabras, que para una guerra se requieren dos partes y que para esta no cuentan con él) son de por sí un ingrediente alentador, por cuanto anuncian actitudes y hechos. No lo serían si no van seguidas de la práctica correspondiente. Y menos aún merecerían aprecio y crédito si meramente encubrieran conductas hostiles.

La congruencia entre la palabra y los hechos tiene que extenderse a los varios conflictos que desde hace meses convirtieron una vasta franja del Sureste en una zona de explosividad potencial. La secuela de litigios dejada por elecciones (que van desde poco claras a francamente fraudulentas) en el sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas, obliga a considerar esa región como un todo, en que los componentes se ensamblan de modo indisoluble, por lo que la afectación de una de las partes contamina necesariamente al resto.

Por eso, y por su propio significado, preocupa lo que ocurre en Tabasco. Luego de que se frustró la defensa legal de sus votos, y sus iniciativas política y jurídica para anular las elecciones se estrellaron contra la rigidez gubernamental, en Tabasco y en la ciudad de México, piquetes de perredistas cerraron el acceso a una docena de instalaciones de Pemex. Su propósito político era

claro. Distaban de cometer sabotaje, y era evidente su finalidad política de presionar en torno de sus demandas, y hasta de mostrar los extremos de ingobernabilidad a que puede llegarse. Se colocaron, sin embargo, en situación de riesgo legal, pues como efectivamente aconteció, era posible que Pemex demandara la intervención del ministerio público para desalojar sus instalaciones. Así ocurrió el miércoles, pero de tal modo que se complicará todavía más la situación. Eran sabidos por la autoridad dos hechos importantes: Por un lado, que el candidato perredista a la gubernatura, Andrés Manuel López Obrador , se hallaba ausente (ya que acompañaba al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a su encuentro en la selva con el subcomandante Marcos) y por otra parte que los manifestantes practicarían el acuerdo de desalojar pacíficamente sus posiciones si eran requeridos para ello por la autoridad.

El desalojo, sin embargo, se realizó con exceso de fuerza y suman decenas los perredistas detenidos. Ya que eran claras la finalidad de los plantones y de su desalojo, no se incurre en lenidad si sólo se remueve el obstáculo para la adecuada operación de Pemex, sin tener que cebarse en perseguir a los manifestantes. Es deplorable, por añadidura, que dentro de una costumbre en que grupos diversos (priístas incluídos) asedian las instalaciones petroleras para conseguir atención a sus demandas, sea esta la primera vez que se practica un desalojo con violencia, y que esa acción sea coordinada por una procuraduría general a cuyo frente está un miembro de la oposición. Militantes de Acción Nacional

cerraron más de una vez puentes internacionales en Ciudad Juárez, por ejemplo, y hubiera sido monstruoso que se les encarcelara por eso, ya que lo primordial era eliminar los impedimentos a la libre circulación.

Si el despliegue policiaco dirigido contra expresiones políticas se destinara a mejorar la seguridad pública en Tabasco, no hubiera sido necesario que la familia de Diego Rosique Palavicini pagara un cuantioso rescate a los secuestradores de este empresario, que ayer lo reintegraron a su ámbito cotidiano, tras una semana de cautiverio.

indicaciones para la edición

1) Sumario

La buena disposición presidencial condensada en la iniciativa que incorpora el poder legislativo al abordamiento del conflicto en Chiapas, requiere traducirse en hechos que en Tabasco no sean la represión y el acoso.

2) Recuadro (con foto del obispo Samuel Ruiz)

La presencia de don Samuel Ruiz, obispo de San Cristobal de las Casas, como mediador en el conflicto entre el gobierno y el EZLN, no fue vista con agrado por el entonces candidato presidencial del PRI Ernesto Zedillo

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Sureste explosivo

La buena disposición presidencial condensada en la iniciativa que incorpora el Poder Legislativo al abordamiento del conflicto en Chiapas, requiere traducirse en hechos que en Tabasco no sean la represión y el acoso.



Inteligente es, y puede ser eficaz en diversos sentidos, la decisión del presidente Zedillo de incorporar al Congreso de la Unión en el abordamiento de la explosiva situación chiapaneca. Propuso integrar una comisión de siete legisladores que medien entre el Ejecutivo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aparte el involucramiento del Poder Legislativo, la propuesta presidencial buscaba conseguir la participación de los partidos opositores, especialmente el PRD que con ese mecanismo hubiera podido actuar desde fuera del conflicto, aunque en algunos de sus aspectos (como el poselectorado y de algún modo en el agrario) sea parte de él. A mi juicio, ese partido procedió erróneamente al marginarse de esa comisión, como lo anunció ayer.

Zedillo propuso que un legislador de cada grupo con representación en las Cámaras sea parte de la comisión, con lo cual el PRI, el PAN el PRD contarían con dos miembros (un senador y un diputado cada quien) y el PT dispondrá de un lugar en el grupo. Aunque ya las dos Cámaras habían organizado comisiones de seguimiento sobre los conflictos de Chiapas, la que se reúne ahora, sin el PRD, tendrá un carácter marcadamente diverso, ya que se propondrá comunicar a las partes en conflicto. Lo hará, además, con un peso político superior al que tuvieron los comisionados Manuel Camacho y Jorge Madrazo, que dependían del presidente de la República. No habrá mengua de la soberanía del Congreso, de que forman parte los legisladores, ni de su autonomía personal, pues el Presidente no los hizo sus empleados, y ni siquiera los ha nombrado. Sólo propuso el mecanismo, y cada grupo parlamentario seleccionó a quienes los representan. Fue entonces cuando el PRD rehusó participar.

La comisión legislativa podrá, y creo que aun deberá, coordinarse con la Comisión Nacional de Intermediación, organizada por el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz, que sigue siendo mediador en el conflicto, reconocido por ambas partes, mientras que el nuevo grupo requiere entrar en contacto con el zapatismo armado y esperar ser tenido como interlocutor. Ante problemas de la magnitud del que vive Chiapas (y con esa entidad el país entero), no sobran las voluntades que sumen esfuerzos y buenos oficios

en pro de la paz. Con el carácter propio de cada cual, y hallando los modos pertinentes para que en vez de estorbarse se alimenten y dinamicen recíprocamente, las dos comisiones pueden encaminarse al mismo fin.

Desde que era candidato, y supongo que no ha mudado su parecer, el ahora presidente Zedillo vio sin agrado la participación del obispo Ruiz en la intermediación. Sería impropio que su propuesta para integrar la comisión mediadora legislativa produjera el efecto de marginar al obispo de San Cristóbal de las Casas. Aun sus más acérrimos enemigos reconocen que sin su presencia todo arbitrio para llevar la paz a Chiapas se frustrará o al menos topará con intensas dificultades.

La buena disposición de ánimo que muestra el presidente de la República con esta iniciativa, y la reiteración de sus propósitos de paz (pues ha dicho, aunque no con esas palabras, que para una guerra se requieren dos partes y que para esta no cuentan con él) son de por sí un ingrediente alentador, por cuanto anuncian actitudes y hechos. No lo serían si no van seguidas de la práctica correspondiente. Y menos aún merecerían aprecio y crédito si meramente encubrieran conductas hostiles.

La congruencia entre la palabra y los hechos tiene que extenderse a los varios conflictos que desde hace meses convirtieron una vasta franja del Sureste en una zona de explosividad potencial. La secuela de litigios de-



La presencia de don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, como mediador en el con-

flicto entre el gobierno y el EZLN, no fue vista con agrado por el entonces candidato presidencial del PRI Ernesto Zedillo.

jada por elecciones (que van desde poco claras a francamente fraudulentas) en el sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas, obliga a considerar esa región como un todo, en que los componentes se ensamblian de modo indisoluble, por lo que la afectación de una de las partes contamina necesariamente al resto.

Por eso, y por su propio significado, preocupa lo que ocurre en Tabasco. Luego de que se frustró la defensa legal de sus votos, y sus iniciativas política y jurídica para anular las elecciones se estrellaron contra la rigidez gubernamental, en Tabasco y en la ciudad de México, piquetes de perredistas cerraron el acceso a una docena de instalaciones de Pemex. Su propósito político era claro. Distaban de cometer sabotaje, y era evidente su finalidad política de presionar en torno de sus demandas, y hasta de mostrar los extremos de ingobernabilidad a que puede llegarse. Se colocaron, sin embargo, en situación de riesgo legal, pues como efectivamente aconteció, era posible que Pemex demandara la intervención del ministerio público para desalojar sus instalaciones. Así ocurrió el miércoles, pero de tal modo que se complicará todavía más la situación. Eran sabidos por la autoridad dos hechos importantes: Por un lado, que el candidato perredista a la gubernatura, Andrés Manuel López Obrador, se hallaba ausente (ya que acompañaba al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a su encuentro en la selva con el subcomandante Marcos) y por otra parte que los manifestantes practicarían el acuerdo de desalojar pacíficamente sus posiciones si eran requeridos para ello por la autoridad.

El desalojo, sin embargo, se realizó con exceso de fuerza y suman decenas los perredistas detenidos. Ya que eran claras la finalidad de los plantones y de su desalojo, no se incurrió en lenidad si sólo se remueve el obstáculo para la adecuada operación de Pemex, sin tener que cebarse en perseguir a los manifestantes. Es deplorable, por añadidura, que dentro de una costumbre en que grupos diversos (priístas incluidos) asedian las instalaciones petroleras para conseguir atención a sus demandas, sea esta la primera vez que se practica un desalojo con violencia, y que esa acción sea coordinada por una procuraduría general a cuyo frente está un miembro de la oposición. Militantes de Acción Nacional cerraron más de una vez puentes internacionales en Ciudad Juárez, por ejemplo, y hubiera sido monstruoso que se les encarcelara por eso, ya que lo primordial era eliminar los impedimentos a la libre circulación.

Si el despliegue policiaco dirigido contra expresiones políticas se destinara a mejorar la seguridad pública en Tabasco, no hubiera sido necesario que la familia de Diego Rosique Palavicini pagara un cuantioso rescate a los secuestradores de este empresario, que ayer lo reintegraron a su ámbito cotidiano, tras una semana de cautiverio.